

SESIONES ORDINARIAS

2002

ORDEN DEL DIA N° 966

COMISION DE CULTURA

Impreso el día 12 de septiembre de 2002

Término del artículo 113: 23 de septiembre de 2002

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre la inclusión de los miembros de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en las disposiciones de los decretos 25 y 821 de 2002, y otras cuestiones conexas. **Vitar y otros.** (4.861-D.-2002.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor diputado Vitar y otros señores diputados, por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la inclusión de los miembros de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en las disposiciones de los decretos 25 y 821 de 2002; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2002.

Hugo G. Storero. – Irma Roy. – Alicia V. Gutiérrez. – Mónica S. Arnaldi. – Araceli E. Méndez de Ferreyra. – Norma R. Pilati. – Roberto J. Abalos. – María del Carmen Alarcón. – Roque T. Alvarez. – Marta I. Di Leo. – Beatriz N. Goy. – Gracia M. Jaroslavsky. – Encarnación Lozano. – Eduardo G. Macaluse. – Irma F. Parentella. – Sarah A. Picazo. – Olijela del Valle Rivas. – Oliva Rodríguez González. – María N. Sodá.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en aplicación de los

decretos 25 y 821 de 2002 cuyas disposiciones alcanzan a los integrantes de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, informe sobre los siguientes puntos:

1. ¿A qué criterios obedece la inclusión de los miembros de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos cuyas funciones son desempeñadas ad honórem en las disposiciones de los decretos 25 y 821 de 2002?

2. ¿Por qué razones se ha dejado cesantes a la totalidad de sus integrantes haciéndolos objeto de idéntico tratamiento que a funcionarios de índole temporal o política, o meramente administrativa, cuando por ley 12.665 y su modificatoria 24.252, se trata de un cuerpo técnico colegiado e interdisciplinario, de carácter federal, cuya duración del mandato se establece en seis (6) años?

3. ¿Qué fundamentos legales se han tenido en cuenta por parte del secretario de Cultura de la Nación, señor Rubén Stella y de la directora de Recursos Humanos y Organizaciones perteneciente a la misma área, Patricia Games, para comunicar el cese de funciones a los miembros de la comisión mediante nota del 19 de junio de 2002?

4. Si tal como reza en los considerandos el decreto 821/2002, dichas disposiciones obedecen a la necesidad de "...eficientizar el funcionamiento de la administración pública nacional a través de una mayor transparencia y de una disminución racional del gasto público..." ¿cómo se explica o justifica la cesantía de personal técnico altamente especializado que trabaja en la comisión sin percepción de sueldos y cuyos nombramientos y mandatos han sido respetados por todos los gobiernos previos, desde la creación de la misma en 1940 hasta la gestión anterior?

5. ¿Basado en qué atribuciones el secretario de Cultura, Rubén Stella, designado por el actual gobierno de transición, puede tomar tal decisión sin la existencia de un decreto presidencial como mar-

ca la ley 12.665 tanto para la designación como para la remoción de los miembros de la comisión?

6. ¿Existe a la firma del presidente de la Nación, doctor Eduardo Duhalde, un decreto que disponga la cesantía de los integrantes de la comisión?

7. ¿A qué obedece que una decisión presidencial que debiera haber sido tomada, según establece la normativa vigente, mediante un decreto, haya sido sustituida por un mecanismo doméstico para comunicar el cese de actividades de dicho personal, a través de una nota firmada por la directora de Recursos Humanos?

8. ¿Se ha evaluado que dicha nota resultaría violatoria de los mecanismos legales previstos y que su comunicación que habría sido efectuada a los destinatarios a través de un fax agravaría el marco de ilegalidad?

*José A. Vitar. – Fabián De Nuccio. –
Fernando C. Melillo. – Irma F.
Parentella.*

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura al considerar el proyecto de resolución del señor diputado Vitar y otros señores diputados, por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la inclusión de los miembros de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en las disposiciones de los decretos 25 y 821 de 2002, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que acompañan la iniciativa, por lo que los hace suyos y así lo expresa.

Hugo G. Storero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El día jueves 1º de agosto de 2002, el prestigioso diario "La Nación", publica un editorial (la número 11) cuyo título es *Patrimonio cultura y política*.

Más allá del escaso cuidado que las distintas y sucesivas administraciones han demostrado en cuanto a la preservación del patrimonio cultural que la nota destaca, su editorialista pone el acento en la curiosa decisión del actual gobierno de transición con respecto a los integrantes de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cuyo personal ha sido dejado cesante en masa.

Resulta altamente preocupante porque, además del método aparentemente empleado a través de una nota que habría sido enviada por fax que viola la normativa de designación o remoción de sus miembros la cual debe ser realizada mediante decreto presidencial, esta comisión tiene una larguísima histo-

ria (72 años) de cuidado y protección de nuestros bienes culturales cuyo accionar y permanencia jamás ha sido objeto de tamaña arbitrariedad.

Se podría decir que es el único organismo nacional, de carácter federal, constituido por ley en el año 1940 y ajeno, a través de todo este tiempo, a los vaivenes y humores políticos, ya que tiene por función específica velar por el acervo histórico.

Su decisiva tarea de asesoramiento obligatorio y vinculante a los poderes Legislativo, en el primer caso, y Ejecutivo en el segundo, por delegación expresa del Parlamento de una facultad que le es propia al Congreso, precisamente le fue transferida para que esa potestad fuese ejercida en forma más operativa, por personas especializadas y que estuvieran por fuera de las confrontaciones políticas e institucionales.

La Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, viene cumpliendo con la difícil misión de elevar las propuestas de lo que a su juicio pueda ser considerado como bien cultural e histórico, ya fueren estos sitios, inmuebles, documentos, monumentos, obras a los que se les asigna valor de bien histórico, turístico, cultural, artístico.

La evaluación se realiza mediante una "puesta en valor" del objeto o bien analizado por los miembros de la comisión, y una vez realizada esta valoración la propuesta es elevada para su consideración a los poderes mencionados para finalmente ser incorporados al registro como patrimonio de todos los ciudadanos.

La preservación, conservación, mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio cultural de un país tiene vinculación directa con la constitución de la identidad de un pueblo, con su memoria y la reconstrucción de su historia, elementos indispensables para la consolidación de una identidad de Nación.

Por tratarse de un aspecto decisivo e importantísimo en el desarrollo de los pueblos en cuanto a la reconstrucción del pasado, es que el cuidado, evaluación y mantenimiento de los bienes patrimoniales de la Argentina, no han estado y no deben estar, sujetos a ninguna alteración institucional ni política.

La extemporánea, desprolija y arbitraria medida del secretario de Cultura y de quienes lo secundan, no puede ser entendida sino como promovida por intereses políticos ocasionales que causan un gravísimo perjuicio al patrimonio cultura de la Nación, es decir a la ciudadanía en su conjunto.

Resulta a todas luces un desatino la manifiesta intencionalidad de desbaratar una institución que nada tiene que ver con la emergencia económica ni con la eventualidad de su personal.

Por todo lo expuesto, señor presidente, se solicita la aprobación del presente proyecto.

*José A. Vitar. – Fabián De Nuccio. –
Fernando C. Melillo. – Irma F. Parentella.*